**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 20 de octubre de 2022

CONSTANCIA: Le informo a la señora Juez que en el auto de fecha 19 de octubre de 2022 se incurrió en una imprecisión involuntaria al indicar que se reconocía personería suficiente a la abogada María Clara Buitrago, cuando la demandada está representada a través de apoderado de pobre.

A despacho para los fines legales que considere pertinentes.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Riosucio, Caldas, veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Rad. 2022-00159-00

Se tiene que mediante auto calendarado del 19 de octubre de 2022 dictado dentro del presente proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia adelantada por **Marco Aurelio Hoyos Acevedo** contra **Ángela Beatriz Calle Vélez** se dispuso fijar fecha para audiencia y reconocer personería a la abogada María Clara Buitrago.

Así las cosas, esta funcionaria amparada en el inciso 1° del artículo 286 del Código General del Proceso, dispone corregir el auto del día 19 de octubre de 2022, en el sentido de aclarar que la demandada se encuentra representada a través del doctor Jorge Humberto Montoya Ladino, designado en amparo de pobreza.

NOTIFÍQUESE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Ruth Del Socorro Morales Patiño
Juez(a)
Juzgado De Circuito - Civil Laboral 001 Riosucio

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Proceso: Ordinario laboral de primera instancia
Demandante: Marco Aurelio Hoyos Acevedo
Demandado: Angela Beatriz Calle Vélez

Código de verificación:

2ffaf0da4b59df8090dba0bcbabd8e104e862b12c922332743e30ba04d9a7234

Documento firmado electrónicamente en 20-10-2022

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/FirmaElectronica/frmValidarFirmaElectronica.aspx>

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 20 de octubre de 2022

CONSTANCIA: Le informo a la señora Juez que, dentro del presente trámite incidental, el 19 de octubre de 2022 se allega respuesta por parte de la NUEVA EPS, informando que se programó consulta por medicina interna, y de esta consulta se determinara el plan de manejo.

Así mismo, me comuniqué al abonado 3217820561 y el apoderado judicial del accionante indicó que efectivamente se programó audiencia de medicina interna, sin embargo, las demás consultas y exámenes médicos a la fecha no han sido programados, aspecto que es independiente a la medicina interna, pues ya obran ordenes para ello, por ende, solicita continuar con el trámite incidental.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Riosucio, Caldas, veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)**

Rad. 2022-00176-00

I. ASUNTO A DECIDIR:

A continuación, decide el despacho lo pertinente dentro del incidente de desacato al fallo de tutela proferido el día 21 de septiembre 2022 emitida por este despacho judicial, dentro de la acción de tutela promovida a favor del señor Jorge Luis Carmona Guiral en contra de la Nueva EPS S.A.

II. ANTECEDENTES PROCESALES:

1. El señor **Jorge Luis Carmona Guiral** presentó a través de apoderado judicial incidente de desacato, a fin de que forzosamente se haga cumplir el fallo de tutela antes referido, como quiera que la Nueva EPS a la fecha no le han programado valoración con neurología, examen de fuerza muscular, por medicina interna y/o medicina familiar, valoración cardiología, examen de creatinina y TSH, además de remitir a Colpensiones la historia clínica.

2. Mediante auto del 04 de octubre avante se dispuso darle el cumplimiento al artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.

3. Los funcionarios requeridos de la Nueva EPS se pronunciaron a través de la Representante Judicial de la entidad, indicando que el caso había sido trasladado al área técnica y a su vez, solicita excluir del presente trámite al gerente general.

4. En decisión del 12 de octubre hogaño se abrió formalmente el incidente de desacato.

5. El 19 de octubre del año en curso se allega respuesta a la apertura del incidente de desacato por parte de la NUEVA EPS S.A, informando que se encuentra programada consulta por primera vez por especialista en medicina interna, y que posterior a ello, se determinará el plan de manejo, además de ello solicita desvincular al presidente de la entidad.

II. CONSIDERACIONES:

Con el fin de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, la Constitución Política, introdujo la acción de tutela en su artículo 86, cuyo objetivo primordial es el de asegurar la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando se vean violentados o amenazados por acciones u omisiones de las autoridades públicas o de particulares en ciertas circunstancias.

El propósito perseguido con la acción de tutela logra concretarse cuando los jueces constitucionales, profieren el fallo correspondiente en el que se decide si se le concede o no el amparo de los derechos fundamentales implorados por los accionantes, y en caso positivo impartir las órdenes tendientes a que cese la vulneración.

Previendo la contingencia del incumplimiento de los fallos de tutela y como desarrollo del Estado de Derecho, el legislador con la facultad para adelantar un seguimiento tanto a las normas como a las decisiones judiciales, estableció el desacato como la vía expedita para lograr el cumplimiento forzado del fallo de tutela, procedimiento que debe conocer el juez que emitió la decisión mediante trámite incidental.

Estipula el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 lo siguiente:

“La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el siguiente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

“La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”.

A su turno, el artículo 53 de la misma codificación, al referirse a las sanciones penales por el mismo hecho, lo hace en los siguientes términos:

“Sanciones Penales. El que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con este Decreto incurrirá, según el caso, en fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar”.

Al pronunciarse sobre la figura del desacato, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:

“...El Juez de tutela que encuentre configurada la violación o amenaza de derechos fundamentales no profiere apenas un dictamen teórico acerca de la transgresión de los mandatos constitucionales sino que, sobre ese supuesto, está obligado a proferir una decisión de naturaleza imperativa que restaure su plena vigencia en el caso específico. Esa decisión se concreta necesariamente a una orden que debe ser acatada de inmediato y totalmente por su destinatario, bien que se trate de una autoridad pública, ya de un particular en los eventos que la constitución contempla. Si es desobedecida, la vulneración del orden constitucional prosigue y además queda en tela de juicio la eficacia de las normas constitucionales protectoras de los derechos fundamentales.

Por tanto, la necesaria consecuencia del desacato tiene que ser la sanción, también inmediata y efectiva para quien ha seguido obrando sin ajustarse a las prescripciones judiciales, subvirtiendo en consecuencia el sistema jurídico. La sanción, desde luego, solo puede ser impuesta sobre la base de un trámite judicial que no por expedito y sumario puede descuidar el derecho de defensa y las garantías del debido proceso respecto de aquél de quien se afirma ha incurrido en desacato.”¹

Así pues, el desacato consiste en una conducta que, vista objetivamente por el Juez, implica el incumplimiento al fallo de tutela, y desde el punto de vista subjetivo, la responsabilidad de quien ha dado lugar a ese incumplimiento, esto es, en cabeza de la persona o personas a quienes está dirigido el mandato judicial, quienes deben gozar de la oportunidad para ejercer su legítima defensa dentro del trámite incidental.

El alto Tribunal Constitucional, igualmente ha reiterado que el Juez de tutela está dotado de una serie de poderes a fin de adoptar todas las medidas necesarias para el cabal cumplimiento del fallo, expresando que la figura del desacato tiene un carácter eminentemente público, institucional, garantista del respeto a la judicatura y al mismo mecanismo de la acción de tutela, pues lo ordenado por el Juez o Tribunal no es de orden privado, sino que toca con la propia entraña de la legalidad y la credibilidad de la función jurisdiccional.²

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha dicho lo siguiente sobre el cumplimiento de lo ordenado en los fallos dictados como consecuencia de acciones de tutela *“La parte resolutive de un fallo de tutela expresamente contiene la orden que debe ser cumplida. La autoridad que brindó la protección tiene competencia para la efectividad del amparo al derecho conculcado. Como principio general, es el Juez de primera instancia el encargado de hacer cumplir la orden impartida, así provenga de fallo de segunda instancia o de revisión, ya que mantiene la competencia hasta tanto no se cumpla la orden a cabalidad. Como corolario de incumplimiento puede surgir el incidente de desacato. Pero cumplimiento y desacato son dos instrumentos jurídicos diferentes.... Cuando hay incumplimiento deliberado de una orden de dar o de hacer o de no hacer, el juez que tenga competencia hará cumplir la orden con fundamento en los*

¹ Sentencia T-776 del 09 de diciembre de 1998.

² Sentencia T-040 del 06 de febrero de 1996.

artículos 23 y 27 del decreto 2591 de 1991. Si adicionalmente se ha propuesto el incidente de desacato, aplicará la sanción teniendo en cuenta que en éste la responsabilidad es subjetiva. Cuando la obligación es de dar, el juez competente hará de todas maneras cumplir la orden. Sin embargo, debe examinar si hay o no responsabilidad subjetiva, para efectos del desacato. Cuando se trata de una obligación de hacer, por ejemplo, proferir un acto administrativo, el incumplimiento acarrea no sólo el incidente de desacato, sino especialmente el ejercicio de todas las medidas que los artículos 23 y 27 del decreto 2591 de 1991 señalan. El Juez debe apreciar que la respuesta del obligado no sea simplemente formal, porque aún con la expedición de un acto administrativo se puede mantener la violación del derecho fundamental, o se puede incurrir en la violación de otro u otros derechos fundamentales.

El juez analizará, en el caso concreto, si la orden de tutela se cumplió o no. Si no se ha cumplido, no pierde la competencia hasta su cabal cumplimiento. Si considera que la orden ya se cumplió, cesa en su competencia y por consiguiente también finaliza el incidente de desacato que estuviere en trámite. Si el juez encargado de hacer cumplir la orden de tutela dice que ya se obedeció, pero este no es cierto, incurre en una vía de hecho, siempre y cuando se den los requisitos para ello. Puede ocurrir, que se conjugue el mantenimiento de la violación y se agrave por otra u otras violaciones, en este caso, el afectado puede escoger entre insistir en el cumplimiento ante el juez competente o instaurar una nueva acción³

En ese sentido, se tiene que mediante la sentencia emitida por este despacho el **21 de septiembre 2022**, se le tuteló al señor **Jorge Luis Carmona Guiral** los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital, lo que a continuación se transcribe:

“Segundo: ORDENAR a la accionada NUEVA EPS S.A. por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, para que dentro del término perentorio e improrrogable de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS proceda si aún no lo han hecho a garantizar la efectiva realización de los servicios de salud 1. Valoración por la especialidad de neurología con relación al diagnóstico de Parkinson, 2. Examen neurológico completo fuerza muscular, marcha, 3. Valoración por medicina interna y/o medicina familiar, para el manejo de la patología hipertensión arterial, hipotiroidismo, 4. Valoración por cardiología. 5. Examen de creatinina y TSH. De igual manera remita a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, las historias clínicas de estas atenciones, para que sean allegadas al trámite de la calificación de pérdida de capacidad laboral del petente y de esta manera se actualice su historia clínica”.

Se tiene, que, a pesar de los requerimientos adelantados por este despacho a la entidad accionada, a la fecha no ha cumplido el fallo de tutela, pues si bien manifiestan que el accionante tiene cita de medicina interna programada para el 24 de octubre del año en curso, también lo es, que, el fallo emitido dispuso otras consultas, y exámenes médicos, que se advierten pueden ser manejadas a través de especialistas independiente y por ende, no es necesario únicamente esperar la atención por medicina interna, como lo expone la Nueva Eps.

Sumado a ello, se tiene que la misma parte incidentante solicita dar continuidad al incidente de desacato, dado que considera no se ha cumplido el fallo.

³ Corte Constitucional. Sent. T-458 de 2002.

Relatado el trámite procesal surtido en este incidente, observa esta funcionaria que la queja de la incidentante tiene total asidero, pues se demostró que la Nueva EPS no ha dado cumplimiento a cabalidad a la orden impartida en el fallo de tutela proferida por este despacho el día **21 de septiembre 2022**.

Luego entonces, el comportamiento asumido por la doctora Martha Irene Ojeda Sabogal, en su calidad de Gerente de la Nueva EPS -Zonal Caldas-, demuestra un claro incumplimiento al pluricitado fallo de tutela, pues no es dable que tal funcionaria consciente del compromiso legal que les asiste para con el señor César Augusto Rojas Montero, no haya realizado las gestiones necesarias para prestarle el servicio de salud antes referido.

El paciente no debe someterse al capricho o querer de la EPS, ya que existe una imposición judicial que la obliga a prestarle el servicio a la accionante de forma correcta y bajo las condiciones plasmadas por el médico tratante, pues tiene todo el derecho a albergar esperanzas de recuperación de su salud, a fin de tener una mejor calidad de vida.

Así pues, resulta de absoluta claridad que la Gerente de la Nueva EPS -Zonal Caldas- doctora Martha Irene Ojeda Sabogal, consiente de la obligación de cumplir el fallo de tutela, enterada oportunamente del incidente de desacato iniciado en su contra, no acató la orden impartida en ese fallo.

El juez de tutela que encuentra configurada la violación o amenaza de derechos fundamentales, no profiere apenas un dictamen teórico acerca de la trasgresión de los mandatos constitucionales, sino que, sobre ese supuesto, está obligado a proferir una decisión de naturaleza imperativa que restaure su plena vigencia en el caso específico. Esta decisión se concreta necesariamente en una orden que debe ser acatada de inmediato y totalmente por su destinatario, bien que se trate de una autoridad pública, ya de un particular en los eventos que la Constitución contempla. Si es desobedecida tal orden, la vulneración del orden constitucional prosigue y además queda en tela de juicio la eficacia de las normas constitucionales protectoras de los derechos fundamentales.

La necesaria consecuencia del desacato tiene que ser la sanción, también inmediata y efectiva, para quien ha seguido obrando sin ajustarse a las prescripciones judiciales, subvirtiendo en consecuencia el sistema constitucional.

En cuanto al incumplimiento de fallos judiciales, la Corte reiteradamente ha manifestado los nocivos efectos que ello genera dentro del orden jurídico para acentuar la importancia de las facultades otorgadas al juez como garante de los derechos fundamentales, porque si el funcionario público o el particular a quien se dirige la orden no la cumple, está violando no sólo el artículo 86 de la Constitución Política, sino también la norma constitucional que establece el derecho fundamental que se ha infringido y la eficacia que deben tener las decisiones judiciales. De ahí las amplias facultades otorgadas al juez de tutela para que haga respetar el derecho fundamental.

Al haberse demostrado el incumplimiento de la orden de tutela, se impone sancionar por desacato a la doctora Martha Irene Ojeda Sabogal, persona a quien se le impondrán dos (2) días de arresto y multa equivalente a 52.62 UVT, por

ostentar la calidad de Gerente de la Nueva EPS -Zonal Caldas- y, por tanto, la llamada a tramitar y gestionar el cumplimiento del fallo, sobre quien recae la legitimación por pasiva en el presente incidente. Al respecto se ha expuesto en la doctrina constitucional lo siguiente:

“ ...Tratándose del cumplimiento, la responsabilidad es objetiva porque no sólo se predica de la autoridad tutelada sino de su superior, y tratándose de desacato, la responsabilidad es subjetiva, esto es, debe acreditarse el dolo o culpa de la persona que incumple el fallo de tutela, no pudiendo presumirse la responsabilidad objetiva por el mero hecho del incumplimiento”⁴

De igual manera, se sancionará a los superiores jerárquicos de la Gerente de la Nueva EPS -Zonal Caldas-, la Gerente de la Nueva EPS -Regional Eje Cafetero- doctora María Lorena Serna Montoya y el Gerente General de dicha entidad doctor José Fernando Cardona Uribe, quienes tampoco demostraron fehacientemente los trámites administrativos adelantados para hacer cumplir el fallo de tutela en cuestión, pese haber sido vinculados y enterados de todas las actuaciones surtidas en el mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, esta sanción sólo se hará efectiva una vez se cumpla el trámite de consulta de esta decisión ante el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991. El trámite de la consulta se hará en el efecto *suspensivo*, en atención a lo dispuesto en la sentencia C- 243 de 1996, en la cual se declaró inexecutable la expresión “*la consulta se hará en el efecto devolutivo*” que estaba contenida inicialmente en el artículo 52 del decreto 2591 de 1991.

Por lo expuesto, **el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, Caldas,**

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar que la Gerente de la Nueva EPS -Zonal Caldas- doctora **Martha Irene Ojeda Sabogal**, la Gerente de la Nueva EPS -Regional Eje Cafetero- doctora **María Lorena Serna Montoya** y el Gerente General de dicha entidad doctor **José Fernando Cardona Uribe**, incurrieron en desacato al fallo de tutela proferido por este despacho el día **21 de septiembre 2022**, dentro de la acción de tutela promovida a instancias a favor del señor **Jorge Luis Carmona Guiral**.

SEGUNDO: Imponer como sanciones por desacato a los doctores **Martha Irene Ojeda Sabogal**, **María Lorena Serna Montoya** y **José Fernando Cardona Uribe**, las siguientes:

A) Sanción de arresto por el término de dos (2) días, los cuales deberán cumplir, en su orden, en los domicilios o residencias actuales de cada uno de los

⁴ La acción de Tutela. *Bernardita Pérez Restrepo*. Consejo Superior de la Judicatura. Página 153.

sancionados que informen de manera previa al Juzgado de primera instancia, en caso de que lo decidido mediante esta providencia sea confirmado.

B) Sanción de multa equivalente a 52.62 UVT para los citados funcionarios, que deberán consignar en un término no mayor a diez (10) días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, a favor del Consejo Superior de la Judicatura en la cuenta DTN MULTAS Y CAUCIONES EFECTIVAS N° 3-0820-000640-8 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, en caso de que lo decidido mediante esta providencia sea confirmado.

TERCERO: Advertir a los sancionados que no obstante las **sanciones** impuestas, subsiste la obligación de acatar la perentoria orden a que se contrae la sentencia de amparo, al propio tiempo que se les exhorta con toda consideración y respeto para que se abstenga de volver a incurrir en las omisiones ya narradas.

CUARTO: Remitir copias de este incidente a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue a los doctores **Martha Irene Ojeda Sabogal, María Lorena Serna Montoya** y **José Fernando Cardona Uribe**, en sus calidades de Gerente de la **Nueva EPS -Zonal Caldas-**, Gerente de la Nueva EPS **-Regional Eje Cafetero-** y Gerente General de dicha entidad, respectivamente, por el o los delitos en que hayan podido incurrir conforme el artículo 53 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Negar la petición del Representante Judicial de la nueva EPS, tendiente a que se desvincule al doctor José Fernando Cardona Uribe, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Remitir el expediente completo, a través de la Oficina de Apoyo Judicial de la ciudad de Manizales, Caldas, para reparto entre los Honorables Magistrados de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a fin de que en esa Superioridad se surta la **consulta** del presente proveído, de conformidad con lo ordenado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

SÉPTIMO: Notificar la presente providencia a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Ruth Del Socorro Morales Patiño
Juez(a)
Juzgado De Circuito - Civil Laboral 001 Riosucio

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

9c4c86c50f69a64b08edba12d1d6795aae04712288e6c19730d9081e5c332c12

Documento firmado electrónicamente en 20-10-2022

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administracion/FirmaElectronica/frmValidarFirmaElectronica.aspx>

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 20 de octubre de 2022

Paso a despacho de la señora Juez la presente demanda Ordinario Laboral de Primera Instancia, a fin de resolver sobre memorial presentado por la parte demandante.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Riosucio, Caldas, veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Rad. 2021-00195-00

Dentro del presente proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia promovido por **Julie Vanessa Ortiz Zuluaga** en contra **Vincol Construcciones S.A.S, Agama S.A.S y Proyectos y Obras Civiles -Procic S.A.S**, se allega solicitud de emplazamiento.

Atendiendo la solicitud de la demandante, este despacho encuentra que la misma debe negarse, en razón a que la parte actora está remitiendo un documento que da cuenta de *“notificación demanda ordinaria laboral”*, y en el cuerpo del mencionado escrito refiere que se adelanta de esta forma, por cuanto la notificación electrónica no se ha logrado.

En este sentido, observa esta judicatura que la parte actora remite un documento que no cumple con las especificaciones de la citación para notificación personal como lo establece el artículo 291 del Código General del Proceso, por ende, no puede hacerse una mezcla de la notificación del Código Procesal con la Ley 1123 de 2022, sumado a ello, y si bien, según la guía YP005046707C0 refiere que la notificación fue devuelta, también lo es, que el documento remitido no cumple con las particularidades de la notificación personal, y por ende, no podrá tenerse en cuenta para ordenarse el emplazamiento.

Adicional a ello, se tiene que la parte demandante ha omitido remitir la notificación electrónica al canal digital dispuesto para tal fin, a través de una empresa de correo que certifique y especifique la trazabilidad conforme es exigido por la ley 2213 de 2022, pues se itera, y como se ha indicado en varias providencias que anteceden en el plenario no obra prueba de la notificación a Vincol Construcciones S.A.S, dado que las aportadas por la parte demandante no dan cuenta de que efectivamente existe acuse de recibido conforme lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 8 de la mencionada ley.

Por lo expuesto, se le solicita nuevamente a la parte actora y antes de proceder al emplazamiento del codemandado Vincol Construcciones S.A.S adelantar la notificación física conforme lo dispone el Código General del Proceso, o la notificación electrónica bajo las premisas de la ley 2213 de 2022, bajo empresas de correo dispuestas para tal fin.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Firmado Por:
Ruth Del Socorro Morales Patiño
Juez
Juzgado De Circuito
Civil
Riosucio - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fc1864366f30454c6ce37c96247cc7e2690ed305d996048635248f21e39567de**

Documento generado en 20/10/2022 03:03:10 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

**JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
SECRETARÍA**

Riosucio, Caldas, 20 de octubre de 2022

Paso a despacho de la señora Juez el presente proceso, a fin de resolver en torno al memorial presentado por la apoderada judicial.

DIANA CAROLINA LOPERA MORENO
Secretaria

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Riosucio, Caldas, veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Rad. 2021-00233-00

Se tiene que dentro del presente trámite ejecutivo laboral adelantado por la **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A** en contra de **Empresa Municipal de Servicios de Aseos EMSA ESP**, se allega renuncia de poder presentado por la abogada María Camila Acuña Perdomo, la cual se acepta, advirtiendo que el ejecutante otorgó poder a la firma **Litigar Punto Com S.A.**, y no de manera particular a dicha abogada, por ende, continua la representación judicial a cargo de la persona jurídica quien es la encargada de prestar los servicios jurídicos.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Firmado Por:
Ruth Del Socorro Morales Patiño
Juez
Juzgado De Circuito
Civil
Riosucio - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **453fcdf0160a7bafc6eb7ba6f07f0abf198ec7c1d1e2e93b214100112411ec59**

Documento generado en 20/10/2022 03:03:09 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO
Riosucio (Caldas), veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (022)

Rad. 2022-00136-00

1. TEMA DE DECISIÓN

Procede el juzgado a emitir sentencia en la acción popular propuesta por el señor Mario Alberto Restrepo Zapata., quien actúa en nombre propio y en representación de la comunidad con movilidad reducida de Supía (Caldas), contra Colombia Telecomunicaciones Movistar en razón al poste ubicado en carrera 9 frente número 3604 esquina de Supía, Caldas.

2. ANTECEDENTES

2.1. Hechos:

Relata el actor popular en su escrito de demanda que “...*Colombia telecomunicaciones, Movistar, posee un poste de ferroconcreto instalada, clavado, puesto sobre el andén o acera en el municipio de Supía, Cda, el cual obstruye el tránsito de ciudadanos que se desplacen en silla de ruedas por el sitio que se refiere*”

2.2. Pretensiones:

En la demanda, el señor Mario Alberto Restrepo Zapata pretende que “*SE ORDENE la entidad responsable el retiro del poste en el término de tiempo que la juzgadora ordene a fin de garantizar ley 361 de 1997, y restituir el espacio invadido por la accionada con el poste referido en la acción (...) pido recompensa que habla el art 1005 y el daño contingente del art 2359 y 2360 CC*” (sic)

2.3. Trámite de Instancia:

2.3.1. El señor Mario Alberto Restrepo Zapata presentó acción popular el 15 de julio del año en curso aportando dos fotografías que dan cuenta de la existencia del poste, la cual fue admitida a través de providencia del 18 de julio del año en curso, disponiéndose la notificación a la entidad accionada, a fin de que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones esbozados por el actor popular, se enteró al Alcalde Municipal y a la Personería, a la Defensoría del Pueblo de Manizales y a los miembros de la comunidad a través de un medio masivo de comunicación.

2.3.2. El accionado empresa de servicio publico Colombia Telecomunicaciones S.A ESP BIC, contestó fuera de término.

2.3.3. A través de proveído del 09 de agosto, se señaló fecha y hora para la audiencia especial de pacto de cumplimiento, la cual se llevó a cabo el 22 de agosto del año en curso a la que no compareció el accionante, razón por lo que se declaró fallido el objeto de la diligencia y se decretaron pruebas.

2.3.4. Mediante auto del 20 de septiembre avante, se le corrió traslado a las partes por el término de tres (3) días del informe de la visita realizada por la comisionada Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Económico de Supía (Caldas).

2.3.5. El pasado 29 de septiembre de 2022 se corrió traslado por el término de cinco (5) días para formular alegatos de conclusión, a la luz del artículo 33 de la Ley 472 de 1998. El actor popular y entidad accionada se pronunciaron en tiempo.

2.4. Pruebas obrantes en el proceso:

2.4.1. Escrito de demanda y fotografías aportadas.

2.4.2. Acta de visita técnica VB-00298805 adelantada el 15 de septiembre de 2022, adelantada por planeación de Supia, Caldas.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Sobre las acciones populares:

La acción popular a que se contrae este procesamiento, se encuentra contemplada en el artículo 88 de la Constitución Nacional, que al respecto reza:

“La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella...”

Este artículo fue desarrollado mediante la Ley 472 de 1998, como una acción principal, en cuya virtud está subordinada a que el móvil sea efectivamente la protección y la tutela de derechos de carácter colectivo, habida cuenta que este trámite está diseñado para la defensa de los derechos e intereses de la comunidad y, por lo mismo, su procedencia está supeditada a que se busque la protección de un bien jurídico diferente al subjetivo, cuya legitimación se halle en cabeza de la colectividad, buscándose un remedio procesal colectivo frente a agravios y perjuicios públicos.

Los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos los intereses de la comunidad y cuyo radio de acción va más allá de la esfera individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley. Así, esta clase de derechos a pesar de pertenecer a todos los miembros de una comunidad, ninguno puede apropiarse de ellos con exclusión de los demás.

Cabe señalar, además, que tales derechos o intereses colectivos, a términos de lo dispuesto en el párrafo del art. 4 de la citada ley, no son únicamente los relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moralidad administrativa, el ambiente y la libre competencia económica, sino también los definidos como tales en la Constitución Política, las leyes ordinarias y los tratados internacionales celebrados por Colombia, según lo dispuesto en inciso penúltimo de la misma norma.

En cuanto a la legitimación por activa y pasiva se encuentra claramente determinada y definida en los art. 12 y 13 de la pluricitada ley, que para el presente asunto la compone por activa una persona natural, quien se encuentra ejerciendo el derecho por sí mismo y en nombre de la comunidad, y por pasiva una entidad particular que presta servicios al público en ese municipio.

Por último, la competencia está radicada en esta agencia judicial por disposición del art. 16 de la Ley 472 de 1998.

3.2. Espacio Público:

Conviene señalar que nuestro ordenamiento jurídico dispone el concepto de espacio público, específicamente de los andenes y los deberes que existe por parte de los municipio y particulares de respetar este derecho colectivo.

En ese orden, la Carta Magna dispone que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y el deber del Estado, no es otro, que garantizar y velar por la protección integral del mismo, y sobre todo sobre su destinación al uso común, el cual debe prevalecer sobre el interés particular.

Por su parte, la Ley 472 de 1998, dispone el goce del espacio público, el cual tiene connotación de derecho colectivo, de la siguiente manera:

“ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:

(...)

d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;

(...)

Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional celebrados por Colombia.

PARAGRAFO. Los derechos e intereses enunciados en el presente artículo estarán definidos y regulados por las normas actualmente vigentes o las que se expidan con posterioridad a la vigencia de la presente ley”.

Así mismo, el concepto de espacio público se encuentra en la Ley 9 de 1989 que establece en su Art. 5 adicionado por el artículo 138 de la Ley 388 de 1997 lo siguiente:

“ARTICULO 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.

Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.” (...)

En igual sentido, encontramos que el artículo 139 del Código Nacional de Policía de Colombia define el espacio público:

“Es el conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y de especial importancia ecológica y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, usos o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de todas las personas en el territorio nacional.

Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa o pasiva; las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías y aislamientos de las edificaciones, fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares; las instalaciones o redes de conducción de los servicios públicos básicos; las instalaciones y los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones; las obras de interés público y los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, paisajísticos y artísticos; los terrenos necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales; los terrenos necesarios de bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente protegidos; la zona de seguridad y protección de la vía férrea; las estructuras de transporte masivo y, en general, todas las zonas existentes y debidamente afectadas por el interés colectivo manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos de este Código se entiende por bienes fiscales, además de los enunciados por el artículo 674 del Código Civil, los de propiedad de entidades de derecho público, cuyo uso generalmente no pertenece a todos los habitantes y sirven como medios necesarios para la prestación de las funciones y los servicios públicos, tales

como los edificios, granjas experimentales, lotes de terreno destinados a obras de infraestructura dirigidas a la instalación o dotación de servicios públicos y los baldíos destinados a la explotación económica.

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de este Código se entiende por bienes de uso público los que permanentemente están al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como por ejemplo los parques, caminos o vías públicas y las aguas que corren”.

Acerca de los bienes de uso público y su relación con el concepto de espacio público, el Consejo de Estado ha destacado lo siguiente:

“Se advierte con claridad que la clasificación del Código Civil entre bienes públicos y bienes fiscales, no es equivalente a la que puede construirse entre bienes afectos al espacio público y bienes no afectados, o, si se quiere definir estos últimos como bienes de uso privativo, habida cuenta que de acuerdo con las definiciones legales no todo bien público se constituye en espacio público y su vez los bienes privados pueden ser objeto de afectación al espacio público”.

De lo anterior, se evidencia que es entendible que el espacio público y los bienes de uso público tengan en la acción popular el mecanismo preciso para su protección y reivindicación, puesto que su vulneración afecta a toda la sociedad, por ende, la protección de los bienes destinados a uso y goce de la comunidad en general tiene rango constitucional, y por ello, se encuentra a cargo del Estado el deber de protección y mantenimiento de los mismo, por su parte, los andenes están destinados al uso peatonal y forman parte del derecho colectivo, cuyo uso y goce adecuado esta garantizado por el Estado.

Sobre la adecuación de espacios públicos para la circulación de personas con discapacidad o disminución física, la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, prevé, entre otros aspectos, los siguientes:

“Artículo 43. El presente título establece las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Así mismo se busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.

Lo dispuesto en este título se aplica así mismo a los medios de transporte e instalaciones complementarias de los mismos y a los medios de comunicación.

Parágrafo. Los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes, deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación.

Artículo 44. Para los efectos de la presente ley, se entiende por accesibilidad como la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes. Por barreras físicas se entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas. Y por telecomunicaciones, toda emisión, transmisión o recepción de

señales, escrituras, imágenes, signos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio u otros sistemas ópticos o electromagnéticos.

La expedición de las Leyes 361 de 1997 *“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”*, 982 de 2005, 1346 de 2009 y 1680 de 2013, se busca hacer efectivos los derechos colectivos a que hacen relación la Declaración de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948, en la declaración de los derechos del deficiente mental aprobado por la ONU el 20 de diciembre de 1971, la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la misma organización el 9 de diciembre de 1975, el Convenio 159 de la OIT, en la declaración de Sund Berg de Torremolinos de 1981 (hoja 3 vto-parte baja), la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1.983 y la recomendación 168 de la OIT de 1983. Para la garantía constitucional de que no prevalezca la discriminación hacia las personas con discapacidad y limitaciones físicas, art. 3º.

Estas normas, que integran el bloque de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico, buscan colocar al país a tono con las corrientes filosóficas de respeto a la dignidad humana, la convivencia ciudadana, la concreción de los mecanismos judiciales idóneos para la efectividad de derechos colectivos.

3.3.- Caso Concreto:

Sea lo primero indicar que las partes gozan de legitimación por activa y pasiva. En efecto, el demandante la tiene en virtud de lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 12 de la Ley 472 de 1998, que señala que se encuentra legitimada en la causa por activa toda persona natural o jurídica, además de las organizaciones y entidades públicas que allí se mencionan.

Por su parte, la entidad accionada se encuentra legitimada por pasiva, al prestar un servicio al público, pues se evidencia en el certificado de existencia y representación legal que Colombia telecomunicaciones S.A E.S.P BIC tiene como objeto social *“La sociedad tendrá por objeto social principal, la organización, operación, prestación, provisión, explotación de las actividades, redes y los servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía nacional e internacional., servicios móviles, servicios de telefonía móvil celular (...) prestación de servicios de telecomunicaciones e informáticos que sirvan de soporte para la realización de actividades de comercio electrónico (...)”*

Adentrándonos al objeto de la litis, solicita a esta judicatura el accionante Mario Restrepo lo siguiente: *“SE ORDENE la entidad responsable el retiro del poste en el término de tiempo que la juzgadora ordene a fin de garantizar ley 361 de 1997, y restituir el espacio invadido por la accionada con el poste referido en la acción (...) pido recompensa que habla el art 1005 y el daño contingente del art 2359 y 2360 CC” (sic)*

En ese orden, se tiene que, el actor popular con la presente demanda allegó dos fotografías que daban cuenta del poste ubicado en el andén y que presuntamente impedía el paso de personas que se trasladan en silla de ruedas, además que dentro del proceso se logró advertir que este poste era utilizado por la entidad accionada.

Del acta de visita técnica adelantada por la Secretaría de Planeación y aportada al plenario, se desprende que *“Se realiza visita en lugar indicado en compañía del señor Andrés Felipe Gómez Sánchez, persona encargada por parte de planeación municipal. Donde se evidencia que el poste fue retirado sin contratiempo. Se reubican redes”* respetándose de esta manera el espacio público discutido en las diligencias.

En ese sentido, se observa entonces, que, si bien al inicio de la acción popular el actor presentó fotografías que dan cuenta de la existencia del poste, también lo es, que, con la visita adelantada por parte de la Secretaría de Planeación, se avizora el retiro del mismo, por ende, estamos frente a un hecho superado, pues al momento de proferirse esta decisión ha cesado la presunta vulneración.

Lo anterior, fue analizado en la sentencia SU (2007-00191-01) del 04 de septiembre de 2018 por el Consejo de Estado, de la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de una acción popular, en la cual se dispuso: (...) *i) Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad judicial de conocimiento consideren que se ha superado la situación que dio lugar a la interposición de la acción, es necesario verificar el cese de la amenaza o la vulneración de los derechos colectivos comprometidos, sin que baste con la simple alegación de haberse adelantado alguna actuación enderezada a la superación de la situación; en aquellos casos en que la amenaza a los derechos colectivos subsista no es procedente declarar el hecho superado, aun cuando se verifique que se ha adelantado alguna actuación a fin de cesar la amenaza o vulneración de los mismos. ii) El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez compruebe la desaparición de la situación que originó la afectación de derechos colectivos, no es óbice para que proceda un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de dichos derechos...”*

Por lo expuesto, esta judicatura declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que, se itera, la solicitud presentada por el actor popular, esto es, el retiro del poste fue atendida por la entidad accionada en el transcurrir de esta acción.

3.4 Improcedencia de conceder incentivo solicitado por el actor popular

Revisada la demanda de acción popular, se evidencia que como pretensión de demanda solicita el incentivo, artículo 34 inciso final ley 472 de 1998 y se aplique art 2359 y 2360 Código Civil.

ARTICULO 2359. TITULAR DE LA ACCION POR DAÑO CONTINGENTE. Por regla general se concede acción en todos los casos de daño contingente, que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción.

ARTICULO 2360. COSTAS POR ACCIONES POPULARES. Si las acciones populares a que dan derecho los artículos precedentes, se declararen fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de la acción, y se le pagarán lo que valgan el tiempo y la diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en casos determinados.

Las acciones populares, incluso la contenida en el tan citado artículo 1005 C.C., son de naturaleza preventiva, es decir, el fin de las mismas no es la búsqueda individual o colectiva de la indemnización que resultara por el daño emergente y/o lucro cesante. En otras palabras, cuando la norma hace referencia al “resarcimiento” no debe entenderse con un carácter indemnizatorio a título colectivo o individual sobre los daños presuntamente causados:

En reiteradas sentencias se evidencia que el término resarcimiento del daño contenido en el artículo 1005 C.C. no debe ser confundido, como se explicó anteriormente con el concepto de indemnización de la responsabilidad civil, sino que al estudiarse en armonía con las demás normas que regulan la materia y los pronunciamientos jurisprudenciales, se evidencia que esta se emplea como sinónimo de reparar, es decir, “*arreglar algo que está roto o estropeado, enmendar, corregir o remediar*”, dejando claro que la verdadera naturaleza o propósito de la acción es la de volver las cosas a su estado anterior o reparar el daño sobre el bien y no, como erradamente se cree, un reconocimiento económico producto de ese daño, siendo que para ello, como se ha explicado de manera amplia, están diseñadas otro tipo de acciones.

En ese orden, debe tenerse claridad que el legislador expidió una ley especial que consagra en procedimiento y demás especificaciones de las acciones populares, en ese orden, para este despacho, prima el principio “*Lex posterior generalis non derogat legi speciali priori*”.

Consecuencia a lo anterior, no abra condena de perjuicios, por cuanto, los mismos no fueron acreditados por el actor popular respecto del daño generado al interés colectivo.

3.5 Condena en Costas

El despacho se abstiene de condenar en costas en esta instancia, en atención a que conforme al numeral 8 del artículo 365 del C.G.P, las mismas no se causaran en estas diligencias.

Por lo expuesto, **EL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE RIOSUCIO (CALDAS)**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto dentro de la acción popular promovida por el señor **Mario Alberto Restrepo Zapata** en contra de **Colombia Telecomunicaciones Movistar** en razón al poste ubicado en carrera 9 frente número 3604 esquina de Supía, Caldas., toda vez, que, la presunta vulneración objeto del trámite constitucional cesó.

SEGUNDO: NEGAR el incentivo económico solicitado por el actor popular.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: Contra la presente decisión proceden los recursos ordinarios interpuestos en término de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH DEL SOCORRO MORALES PATIÑO
Juez

Firmado Por:
Ruth Del Socorro Morales Patiño
Juez
Juzgado De Circuito
Civil
Riosucio - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bda4fc847e60a25b5451472b2e59d8067c2eab876ae7a5df2003b6a86655ed52**

Documento generado en 20/10/2022 03:03:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>